GRISUR
Grupo de Información
y Solidaridad Uruguay
Case postale 92
1211 Genève 4
SUISSE

Nº 67

10 de mayo de 1977

INFORMACIONES

Compte Nº 12-14847

1. 5 URUGUAYOS DESAPARECIDOS A fines de abril pudo saberse
EN BUENOS AIRES SON VISTOS por diversas fuentes que Nebio
EN DOS CARCELES ARGENTINAS. Ariel Melo Cuesta, secuestrado
en Buenos Aires en febrero del

año pasado, y Ruben Prieto González, Washington Cram y Pablo Errandonea, desaparecidos en setiembre y octubre, se encontraban detenidos en Campo de Mayo, donde tiene su sede la división más importante del ejército argentino. Asimismo, se supo que Winston Mazzuchi, secuestrado junto con Melo, habría sido visto en el Penal de Rawson.

Se trata de dos de los establecimientos donde los presos políticos son sometidos a un trato más riguroso. Con respecto a Campo de Mayo, la dictadura argentina ni siquiera ha reconocido su utilización como lugar de reclusión de presos políticos y allí se aloja, precisamente, a los prisioneros cuya detención no ha sido reconocida por las autoridades militares ni policiales.

A pesar de estas circunstancias, la confirmación de que por lo menos cinco de los más de 30 uruguayos desaparecidos en la Argentina desde agosto de 1975 de los cuales no se tenía ninguna noticia aún se encuentran con vida, permite alentar esperanzas respecto de la situación de todos los demás. Además de Melo, Mazzuchi, Prieto, Cram y Errandonea, se trata de: Félix Míguez, Ricardo del Fabro de Bernardis, Hugo Gomensoro, Manuel Liberoff, Hugo Méndez, Gerardo Gatti, León Duarte, Cecilio Mechoso Méndez, Adalberto Soba, Roger Julián Cáceres, Victoria Grisonas Andrea-juste, Miguel Angel Morales Von Pieverling, Jorge Zaffaroni, María Elena Islas de Zaffaroni, Cecilia Trías, Pablo Recagno, Rafael Lezama González, Rosario Carretero, Raúl Tejera, Miguel Angel Moreno Malugani, Washington Queiro, Carlos Alberto Rodríguez Mercader, Bernando Arnone y los niños Amaral García Hernández, Simón Antonio Riquelo, Anatole Julián Grisonas, Victoria Julián Grisonas y Mariana Zaffaroni Islas.

2. LOS CAMBIOS EN LAS Finalmente, a fines de abril se concre-
FUERZAS ARMADAS. tó el pase a la situación de retiro, por
límite de edad, del Gral. Eduardo Zubía,
que estaba al mando de la II División Militar. Para esta jefatura fue designado el Gral. Juan José Méndez. Este último era el Director de la Escuela Militar, puesto para el cual fue nombrado el Gral. Alberto Ballestrino, recientemente ascendido al generalato. Por su parte, el Gral. Manuel J. Núñez —el otro ascendido este año— fue designado Jefe del Estado Mayor del Ejército, en sustitución del Gral. Luis V. Queirolo, que semanas atrás había sido nombrado Agregado Militar en los Estados Unidos. Anteriormente Núñez se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Personal del Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ahora pasó a ocupar el Cnel. Guillermo H. Mateos.

En la Marina, el Contralmirante Hugo Márquez pasó a ocupar la Comandancia en Jefe en sustitución de Víctor González Ibargoyen. Este último no pasó a situación de retiro; según la información oficial su cese como Comandante en Jefe se produjo debido a que cumplió el plazo máximo para desempeñarlo, que es de cuatro años.

Mientras tanto, en la Fuerza Aérea se aprobaron los ascensos al grado de Coronel PAM (piloto aviador militar) de seis tenientes coroneles: Julio Uría, Héctor D. Salas, Julio C. Clavijo, Dínor R. Ramírez, Henry B. Saralegui y Artigas Cairo.

Un comunicado oficial, emitido por la DINARP el 22 de abril, pretendió quitar toda connotación política a estos movimientos dentro de las Fuerzas Armadas. Dice textualmente el comunicado:

"Con relación a los destinos en las Fuerzas Armadas, de los cuales se han hecho eco los medios de difusión, se hace saber lo siguiente:

1. Los destinos en las Fuerzas Armadas están regulados por la correspondiente Ley Orgánica.

2. Los mismos se confieren a sus integrantes, motivados por necesidades del Servicio.

Cualquier otra connotación que se pretenda dar a estos actos, y que no obedezca a las razones indicadas, sólo consigue confundir a la opinión pública."

La explicación oficial no parece demasiado convincente. Por más que el pase a retiro de Eduardo Zubía se haya debido, efectivamente, a la aplicación de disposiciones de la Ley Orgánica Militar, la simple decisión de aplicar en ese caso particular y no en otros tales disposiciones constituye una medida política. También lo es la equilibrada adjudicación de ciertos puestos claves (Jefatura del Estado Mayor del Ejército para Núñez, hombre de Vadora; Jefatura de Policía de Montevideo para Bonelli, hombre de Alvarez, etc.). Por otra parte, es sugestivo que los movimientos y ascensos se hayan producido más de dos meses después de la fecha prevista (claro que los flamantes generales y coroneles no sufrirán perjuicio económico alguno, ya que se dispuso que cobren sus nuevos sueldos con retroactividad al 1º de febrero). Pero es sobre todo el contexto en el cual se han producido estos movimientos lo que lleva a pensar que han tenido —o tendrán— las connotaciones políticas que la dictadura pretende ocultar. En efecto, como surge de las dos informaciones siguientes, los cambios tuvieron lugar en un momento en que las deliberaciones sobre la situación política —a todos los niveles de la oficialidad y no sólo en la cúpula militar— han alcanzado la mayor intensidad desde febrero de 1973. Claro que por "connotaciones políticas" no debe entenderse, necesariamente, perspectivas de cambios en la orientación política de la dictadura; es posible, en cambio, que pueda alterarse la correlación de fuerzas al interior de las FFAA en lo que se refiere a las luchas personales por el poder.

3. MILITARES ASEGURAN VERTICALIDAD El Poder Ejecutivo promulgó el 21 de abril una ley
ELIMINANDO A LOS DISCREPANTES. aprobada el día anterior

por el Consejo de Estado, con trámite urgente, por la que se faculta a los Comandantes en Jefe a disponer, previo acuerdo de la Junta de Oficiales Generales, el retiro obligatorio de cualquier militar.

La Ley Orgánica Militar preveía, hasta ahora, sólo dos causas de retiro obligatorio de los militares: el cumplimiento de determinado límite de edad (60 años para los generales, contralmirantes o brigadieres; 55 para los coroneles del ejército o la fuerza aérea y los capitanes de navío; y así sucesivamente según los grados) y el cumplimiento de determinado número de años en el grado (ocho en el caso de los oficiales generales). El nuevo apartado, que establece la tercera causal de retiro obligatorio, dice textualmente:

"Por requerimiento efectuado por el Comandante en Jefe de la Fuerza respectiva a un Oficial General u Oficial Superior, ^{← miso "g"} previa decisión por cuatro quintos (4/5) de votos o la unanimidad, si la composición es inferior a cinco, de la Junta de Oficiales Generales de la Fuerza correspondiente, integrada por los señores Oficiales Generales en situación de actividad, residentes en el país y ocupando cargos.

Formulado el requerimiento, el Oficial General u Oficial Superior podrá pedir, en un plazo de 48 horas, su retiro voluntario. En su defecto, el Comandante en Jefe de la Fuerza cursará el retiro obligatorio del Oficial General u Oficial Superior de que se trate, debiendo de inmediato así decretarlo el Poder Ejecutivo."

El diario "El País" explica claramente el propósito que se persigue con esta modificación de la Ley Orgánica Militar: "Esta nueva norma tiende a asegurar, mediante un mecanismo legal, la acción coherente de los integrantes de las Fuerzas Armadas, al promover el apartamiento de aquellos cuya actuación comprometa las finalidades que inspiran su acción."

Según informó la prensa, la introducción de esta nueva causal se empezó a discutir a nivel castrense a principios de abril. A fines de marzo, 32 Oficiales Superiores habían sido arrestados por presentar a la Superioridad un documento político en el que ponían de relieve el fracaso de la política seguida por la dictadura, el incumplimiento de los comunicados 4 y 7 y la necesidad de encaminar el país "a la senda de la legalidad de donde no debió salir" (ver "Informaciones", Nos. 65 y 66).

4. REUNION DE CORONELES EXPRESA
APOYO A JEFES MILITARES Y
PIDE CAMBIOS EN EL GABINETE.

Según un cable de la Agencia Interpress Service (IPS) publicado en el diario "El Día" de México, a mediados de abril se

celebró una reunión plenaria de coroneles en la que se analizó el memorándum presentado algunas semanas antes a la Superioridad por un grupo de Oficiales Superiores que fueron sancionados.

Según IPS, al término de la reunión se resolvió sugerir a la Junta de Comandantes en Jefe "la conveniencia de hacer modificaciones en el equipo ministerial y efectuar cambios en la política económica y diplomática". También se resolvió manifestar su apoyo a los altos mandos militares, pero al mismo tiempo, se pidió que los autores del memorándum de fines de marzo no fuesen declarados culpables de ningún delito, ya que habían actuado con sentido patriótico y con el debido respeto a la autoridad y a los mandos.

Siempre de acuerdo con la misma fuente informativa, los coroneles habrían manifestado además su deseo de que los generales

Esteban Cristi y Eduardo Zubía permaneciesen en sus cargos, a pesar de que, de acuerdo con la Ley Orgánica Militar, debían pasar a retiro. Se trata de "los primeros jefes que asumieron la responsabilidad de salvar al país de la subversión y los escándalos políticos" -habrían afirmado los coroneles- "y hay que tener en cuenta que el proceso no está aún finalizado y no resulta lógico sustituir a dos jefes en mitad de la batalla sólo para cumplir disposiciones reglamentarias".

Por lo que respecta a una posible apertura hacia los partidos políticos, la información de IPS consigna que "los coroneles habrían opinado que aún no ha llegado el momento de que las Fuerzas Armadas se replieguen hacia sus funciones profesionales específicas". Y en cuanto a la actual política norteamericana en materia de derechos humanos, en la reunión se habría decidido solicitar mayor información a los Comandantes, pero se adelantó que "no se tolerará ninguna intromisión extranjera en los asuntos internos del Uruguay".

Finalmente, en lo que se refiere a los cambios en el equipo ministerial sugeridos por el plenario de coroneles, IPS señala que "se habría solicitado la remoción de los ministros de Relaciones Exteriores (Alejandro Rovira), del Interior (Gral. Hugo Linares Brum) y de Economía y Finanzas (Valentín Arismendi)" y que también se pidió que se produzcan relevos en otros organismos del Estado en los que "falta efectividad para concretar los postulados dinámicos de la Revolución Oriental".

5. LA SITUACION EN EL PENAL DE LIBERTAD.

Trascendió que antes de iniciar la huelga de hambre (ver "Informaciones", Nos. 65 y 66), Mario César Rossi Garretano fundamentó por escrito tal medida ante las autoridades del Penal. Estas dispusieron inmediatamente su traslado a "la isla", es decir, las celdas de castigo del establecimiento, donde se mantiene a los reclusos en situación de total incomunicación, y ordenaron que un médico siquiatra, el Dr. Gori, viera a Rossi. Desde entonces éste no ha podido recibir visitas de familiares ni de su abogado.

El incremento de la represión en todo el Penal se ha caracterizado por lo siguiente:

- a) suspensiones de recreo, dispuestas por motivos nimios;
- b) racionamiento, al mínimo, de la alimentación, lo que ha provocado ya algunos casos de tuberculosis;
- c) racionamiento del agua;
- d) mayores restricciones en materia de lectura (ahora cada recluso puede recibir dos libros, pero sólo puede tener uno por vez en la celda; está prohibido estudiar idiomas, filosofía, historia, literatura y los reclusos ni siquiera pueden leer la Biblia);
- e) limitaciones a la realización de manualidades (frecuentes cambios de los materiales que se permite hacer llegar a los presos políticos);
- f) retiro de pertenencias de los reclusos y quema o deterioro de las mismas por parte de la guardia;
- g) continuas provocaciones por parte de la guardia con el fin de provocar reacciones que justifiquen la aplicación de nuevas sanciones;
- h) control más estricto de las visitas y de la correspondencia.

6. PARITARIAS: NO SE CONSTITUYO NINGUNA; El 16 de febrero, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto sobre

"comisiones paritarias", tendiente a promover la creación, en todas las empresas privadas, de organismos destinados, según se afirmó en su oportunidad, a "lograr un entendimiento cordial entre patrones y trabajadores". El propósito de la dictadura era, en realidad, el de crear una parodia de funcionamiento sindical, a fin de mejorar la imagen internacional. En este sentido, en el último informe de la OIT sobre la situación sindical en el Uruguay se abría un cierto crédito a la dictadura a raíz de ese decreto ("... pese al tiempo transcurrido desde el establecimiento del estado de urgencia, en junio de 1973, salvo un decreto relativo a la creación a nivel de empresa de comisiones paritarias, cuyo buen funcionamiento conduciría, según indica el Gobierno, a la preparación de un anteproyecto de ley sindical, la situación sindical no ha progresado en el país..."), aunque se encargaba al representante del Director General de la OIT que viajaría al Uruguay que obtuviese informaciones sobre "... la elección de representantes de los trabajadores en las comisiones paritarias y el funcionamiento de éstas" (ver "Informaciones", Nº 64).

Ahora bien; a más de tres meses de la aprobación del decreto que promueve la creación de las paritarias, funcionarios del Ministerio de Trabajo declararon a la prensa que no se ha constituido ni una sola. Trascendió asimismo que el Ministro Echeverry Stirling estaría encarando la posibilidad de obligar a patrones y trabajadores a constituir dichos organismos, cuya creación —de acuerdo con el decreto de febrero— es facultativa.

7. NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS.

Aureliano Aguirre, que se desempeñaba como Director de Información de la Cancillería y fue uno de los delegados de la dictadura ante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tuvo lugar recientemente en Ginebra, fue designado embajador del Uruguay en la República Federal de Alemania.

El Poder Ejecutivo anunció que quedaba levantada la intervención de AFE. Los tres coroneles que actuaban como directores interventores del organismo —Iván S. Paulós, Oscar L. Macía y Carlos M. Poladura— pasaron a ser, en virtud del mismo decreto, directores a secas. La misma parodia (levantamiento de intervenciones manteniendo a los interventores) se realizó en noviembre en relación con ANCAP y los bancos Hipotecario y República (ver "Informaciones", Nº 59).

El Ing. Enrique Kliche presentó renuncia indeclinable como Director Interventor de la Universidad del Trabajo. No se dieron a conocer los motivos de la decisión de Kliche, que desempeñaba ese cargo desde hacía un año y medio. La UTU se encuentra ahora acéfala, ya que la Subdirección está vacante desde el fallecimiento, a fines del año pasado, del Capitán de Navío Elbio Amorín.

8. PROCESAN EN BUENOS AIRES A DOS REFUGIADAS URUGUAYAS. Las hermanas Graciela y Sandra Alvarez, detenidas por la Policía Federal el 23 de marzo en

el Aeropuerto de Ezeiza, cuando iban a tomar el avión que las conduciría a Suecia en condición de refugiadas políticas, fueron procesadas por las autoridades judiciales argentinas y se encuentran recluidas actualmente en la cárcel de Olmos.

9. EL GOBIERNO ITALIANO SE INTERESA POR LA SITUACION DEL GRAL. LIBER SEREGNI. El Subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia, Luciano Radi, declaró ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que su Gobierno está preocupado por la situación del Presidente del Frente Amplio del Uruguay y está dispuesto a examinar favorablemente una eventual radicación del General Seregni en Italia en caso de que sea liberado. Y añadió: "Aun teniendo en consideración la delicada situación existente en el Uruguay y sus consecuencias con relación a nuestros compatriotas allí residentes y a sus intereses, el Gobierno no dejará de lado ninguna iniciativa para lograr una solución del caso Seregni". La intervención del representante de la Cancillería en la Comisión legislativa se debió a las gestiones planteadas por el diputado demócratacristiano Alfredo de Poi (ver "Informaciones", N° 65).
10. CIENTIFICOS DE EEUU Y DE ITALIA RECLAMAN LA LIBERTAD DE MASSERA. El 27 de abril, al término de su reunión anual, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos aprobó una resolución en la que se solicita la libertad de ocho hombres de ciencia presos, en tres países distintos, por razones políticas. Se trata del matemático uruguayo José Luis Massera, cinco físicos argentinos desaparecidos durante el último año (Federico Alvarez Rojas, Gabriella Carabelli, Juan Carlos Gallardo, Antonio Missetich y Eduardo Pasquini) y dos disidentes soviéticos (Sergei A. Kovalev y Yuri Orlov). Por su parte, un grupo de científicos italianos —entre los que figuran el Premio Nobel de Medicina Daniel Bovet, Edoardo Amaldi, Carlos Bernardini, Giuseppe Montaletini, Claudio Procesi y Beniamino Segre— solicitaron al Poder Ejecutivo y al Parlamento de su país que gestionen la libertad del Ing. Massera y de su esposa, Marta Valentini. Subrayan que ambos han sido cruelmente torturados y que no han contado con ningún derecho de defensa y afirman que Massera, mundialmente conocido por sus trabajos científicos, especialmente sobre el análisis funcional y las ecuaciones diferenciales, deberá cumplir condena hasta 1993.
11. NUEVAS GESTIONES POR LOS PERIODISTAS PRESOS. La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y la Asociación Brasileña de Prensa dirigieron sendas notas al embajador uruguayo en Brasil, Carlos Manini Ríos, interesándose por la situación de los periodistas presos en el Uruguay por motivos políticos. En la carta de la FELAP, firmada por su Vicepresidente, el brasileño José Gomes Talarico, se pide autorización al gobierno uruguayo para visitar a los periodistas presos y expresarles la solidaridad de sus colegas de todo el continente. Por otra parte, al regresar a París, el periodista francés Jacques Arnault, de "L'Humanité", declaró que había permanecido detenido en el Uruguay durante 10 horas por haber entrevistado a varias personalidades políticas durante su estadía en Montevideo. Arnault expresó su esperanza de que dichas personalidades no sean molestadas por las autoridades uruguayas a raíz de las entrevistas que le concedieron.

12. PROHIBEN PUBLICAR COMUNICADO DE LA FEDERACION RURAL. El 26 de abril el Ministerio del Interior comunicó a todos los medios de difusión que estaba prohibida la publicación de un comunicado firmado por 37 ligas de trabajo, asociaciones agropecuarias y sociedades rurales integrantes de la Federación Rural, referente a la política de carnes del gobierno.

Semanas antes, el Presidente de la Federación, Dr. Ignacio Zorrilla de San Martín, se había entrevistado con el Ministro de Agricultura, Dr. Estanislao Valdés Otero, a fin de plantearle cinco problemas que los productores consideran de fundamental importancia: las dificultades para cumplir con el régimen impositivo vigente, las deudas con el Banco República, el traslado del precio internacional de la carne al productor, la situación —que califican de angustiante— de los productores papeiros y las medidas que prohíben a los productores morosos comercializar sus haciendas. Al término de la reunión, Zorrilla declaró a la prensa que no tuvo oportunidad de referirse detalladamente a cada uno de esos problemas porque "el Ministro se nos adelantó, y luego de exponer los lineamientos del plan global que se propone dar a conocer en mayo, dijo que no habrán soluciones inmediatas".

Por otra parte, según cifras suministradas por DINACOSE, desde julio de 1975 a junio de 1976 la existencia de vacunos disminuyó de 11 millones 500 mil cabezas a 10 millones 700 mil; entre 1974 y 1976, la superficie de praderas artificiales se redujo de 504 mil hectáreas a 387 mil 561; y en el mismo bienio, la superficie de campos mejorados pasó de 1 millón 213 mil hectáreas a 982 mil 750.

Finalmente, corresponde señalar que en febrero se faenaron 89 mil 977 vacunos, mientras que en el mismo mes de 1976 la cifra fue de 149 mil 353 y, en febrero de 1975, de 101 mil 105. Las exportaciones de carne de febrero de este año también fueron sensiblemente menores a las registradas 12 meses antes (12 mil 355 toneladas en 1977 contra 18 mil 38 en 1976).

13. LOS EXPORTADORES TAMBIEN PROTESTAN. La Unión de Exportadores del Uruguay envió a la SEPLACODI un memorándum en el que critica recientes medidas del gobierno "que pueden producir una reducción de las actividades económicas del país, de perniciosos efectos" y pide que sean dejadas sin efecto. Los exportadores afirman que se trata de medidas "invariablemente dirigidas a retacear apoyo a la exportación", especialmente en materia de financiamiento, exoneración impositiva, exoneración de recargos de importación y reintegros, que "arrojan dudas sobre los reales propósitos del Gobierno y crean una situación de inestabilidad entre los empresarios". Finalmente, la Unión de Exportadores señala que es ilusorio que el Uruguay se plantee exportar sin protección oficial en momentos en que incluso las potencias industriales están desarrollando políticas encaminadas a incentivar sus exportaciones.

14. NUEVO AUMENTO DE LOS COMBUSTIBLES. El 4 de mayo el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo aumento —el cuarto en 10 meses— en el precio de los combustibles. La nafta roja pasó de N\$ 2,31 a N\$ 2,49 por litro.

15. EN 4 MESES EL PESO FUE DEVALUADO EN UN 10,5 %. El 25 de abril el Banco Central dispuso la sexta devaluación de 1977, que fue del orden del 2,60 por ciento. El dólar comercial pasó de N\$ 4,27 a N\$ 4,38 en la compra y de N\$ 4,31 a N\$ 4,42 en la venta. En lo que va del año, el peso uruguayo ha perdido el 10,5 por ciento de su valor.
16. MAS DEL 15 % SUBIO EL COSTO DE VIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE: PORCENTAJE 5 VECES MAYOR AL REGISTRADO EN 1976. Según la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía y Finanzas, el costo de vida aumentó un 3,22 por ciento en el mes de marzo, lo que totaliza un 15,03 por ciento para el primer trimestre de 1977. Sólo el aumento de marzo equivale, según la misma repartición oficial, al registrado durante los tres primeros meses del año pasado (3,21 por ciento).
Pero la suba del costo de vida ha sido aun mayor de acuerdo con las cifras proporcionadas por otra dependencia oficial, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas: 3,70 por ciento para el mes de marzo, y 16,5 por ciento para el primer trimestre de 1977.
Funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas han estimado, teniendo en cuenta los porcentajes registrados en los primeros meses del año, que a fines de 1977 el índice de aumento del costo de vida no podrá ser inferior al 70 por ciento y podría llegar al 80 por ciento, es decir al doble del registrado en 1976.
17. TAXIS: SEGUNDO AUMENTO EN 3 MESES. A fines de abril la Intendencia de Montevideo dispuso un aumento de alrededor del 18 por ciento en las tarifas de los taxis, que a fines de enero ya habían subido aproximadamente en el mismo porcentaje (ver "Informaciones", Nº 63). La bajada de bandera pasó de N\$ 1,10 a N\$ 1,30; las fichas, que caen cada 140 metros, de N\$ 0,07 a N\$ 0,08, y la hora de espera, de N\$ 10,70 a N\$ 12,30.
18. PREPARAN NUEVA LEY DE REGLAMENTACION SINDICAL. Al ser interrogado sobre el proyecto de ley sindical que está elaborando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Dr. Alfredo Baeza, Subsecretario de esa cartera, declaró a la prensa: "Es prematuro hablar sobre sus características y su alcance, dado que sus lineamientos recién comienzan a manejarse. Y más prematuro aún sería dar una fecha a partir de la cual entrará en vigor. De todos modos, un adelanto sobre su contenido puede extraerse del contenido filosófico y práctico del texto que regula el funcionamiento de las comisiones paritarias".

A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS

El GRISUR recuerda a todas las organizaciones políticas uruguayas que luchan contra la dictadura la invitación formulada en el Nº 66 de "Informaciones" para que difundan sus posiciones desde una nueva sección de este boletín.

El 15 de junio vence el plazo de recepción de los documentos referentes a la caracterización de la dictadura.

GRISUR

INFORMACIONES

Nº 67

Suplemento

A UN AÑO DE LOS ASESINATOS DE ZELMAR MICHELINI, HECTOR GUTIERREZ RUIZ, WILLIAM WHITELAW Y ROSARIO BARREDO

... representamos a los que no pueden venir por que han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el régimen. ... Nuestra voz es la de todos aquellos que habiendo sufrido no pueden gritar su rebeldía y proclamar su lucha. Pero no sólo es una voz de acusación y de condena. Es también y siempre una voz de esperanza y de fe.

ZELMAR MICHELINI, TRIBUNAL RUSSELL II, 1974

... Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Arturo Recalde, Jorge Salerno, Ricardo Zabalza, Alfredo Cultelli, Indalecio Olivera, Roberto Rhon Fernández, Fernán Pucurull, Pedro Oclides Báez, Heber Nieto, Manuel Ramos Filippini, Héctor Castagnetto, Julio César Spósito, Leonel Martínez Platero, Walter Sanzó, Luis Carlos Batalla, Edison Marín, Juan Fachinelli, Héctor Jurado, Carlos Alvariza, Ruben Canziani, Ibero Gutiérrez, Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder Orozco, Horacio Rovira Grieco, Hugo Blanco Katrás, Luis Martirena, Ivette Giménez de Martirena, Norma Pagliano, Nicolás Gropp, Blanca Castagnetto, Gustavo Couchet, Luis Alberto Mendiola, Raúl Gancio, Ricardo Walter González, José Ramón Abreu, José Washington Sena, Milton Fernández, Héctor Cervelli, Ruben Claudio López, Nelson Rodríguez Muela, Hugo Castro, Roberto Gomensoro, Oscar Fernández Mendieta, Ramón Peré, Ruben Luzardo, Hugo de los Santos Mendoza, Walter Medina, Gerardo Alter, Walter Arteche, Gilberto Coghlan, David Kliven, Aldo Perrini, Julio Larrañaga Martins, Diana Maidanik, Silvia Reyes, Laura Raggio, Alberto Blanco, Víctor Padilla, Nybia Zabalzagaray, Anselmo García, Luis Latrónica, Guillermo Jabif, Daniel Banfi, Idilio de León, Iván Morales, Héctor Brum Cornelius, María de los Angeles Corbo de Brum, Floreal García Larrosa, Mirtha Yolanda Hernández, Graciela Estefanell, Raúl Feldman, Luis Eduardo González González, Fernández Cúneo, Margarito Méndez, Eduardo González, Julio César Rodríguez Molinari, Amelia Lavagna de Tizze, Celso Fernández Hernández, María Luisa Kaián, Raúl Melogno Lugo, Alvaro Balbi, Mario Camiurano, Marta Quiroga de Camiurano, Carlos Curuchaga, Pedro Ricardo Lerena Martínez, Carlos Argenta Estable, Julián López, Bonifacio Olivera, Eduardo Mondelo Techera, Aldabalde, Nuble Yic, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw, Rosario Barredo, Ivo Fernández, Silvina Saldaña, José Artigas, J. Montedeoca, Hilda Dellacroix de Ormaechea, Telba Juárez de Fachelli, Raúl Facio, Danilo Porta...

ZELMAR MICHELINI: discurso ante el Tribunal Russel II

(PRIMERA SESION. ROMA. MARZO-ABRIL DE 1974) TEXTO INTEGRO. PUBLICADO EN EL DIARIO
"EL DIA" DE MEXICO. EL 31 DE MAYO DE 1974

UN BREVE ANALISIS*

Uruguay es un país pequeño, sin grandes riquezas naturales ni valores estratégicos. Su pueblo se formó sobre la base de una importante inmigración española e italiana que le permitió constituirse al cabo de más de 100 años de vida en un país de trabajo, de gente cordial y acogedora, cuyo mayor orgullo era su estabilidad institucional, su culto a la libertad, el respeto al hombre y a los derechos inherentes a su persona. En una América convulsionada, permanentemente barrida por los avatares de un destino trágico, presentaba una imagen de paz, de concordia, de tolerancia. Durante los últimos 40 años, su vida se desarrolló normalmente; el pueblo convocado a las elecciones designaba sus autoridades y eran éstas, legítimamente constituidas, las que orientaban al país. Agrupaciones políticas distintas, con ideologías muchas veces enfrentadas, dirimían ante el juez supremo de la opinión pública sus diferencias conceptuales. Desde hace unos años, primero lentamente y luego con ritmo de vértigo, todo se fue perdiendo. El último mes del 67 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este Tribunal. Pero en la obligación de determinar una fecha, a fin de establecer pautas, es a partir de ese año, el que acentúa las diferencias, se empiezan a conculcar derechos y libertades, comienza a restringirse la libre expresión, se mata en las calles, se reprime.

La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra la de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la mala asistencia sanitaria, el déficit de viviendas, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también, las huelgas reprimidas, las Medidas Prontas de Seguridad, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la violencia comienza a hacer sentir su presencia; es una de las tantas respuestas que el pueblo da a la violencia gubernamental.

De ahí en adelante, todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse.

¿Qué es el Uruguay de hoy? ¿Por qué nuestra palabra ante este tribunal que con su nombre honra la memoria ilustre de un abanderado de la paz, un fanático de la libertad y la tolerancia? Para denunciar al mundo entero con dolor y tristeza, pero cumpliendo un deber ineludible, cuál es la situación de nuestra patria: el arrasamiento de sus instituciones, la negación de la ley y los derechos por ella consagrados; la persecución y la muerte desatadas, la tortura y el maltrato físico y espiritual, como medios normales que tiene el gobierno, los militares, la dictadura, de considerar a sus compatriotas.

La dictadura eliminó un Parlamento elegido tan sólo 18 meses atrás; clausuró toda la prensa opositora; disolvió los sindicatos y apresó a sus principales dirigentes; intervino la Universidad, destituyó profesores, encarceló a sus máximas autoridades; prohibió toda actividad política y puso fuera de la ley a los partidos de izquierda y detuvo, torturó, vejó a miles y miles de ciudadanos, obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, de todas las clases, edades y condiciones, y mató en la calle y en las cárceles, por diferentes medios, pero siempre asesinando.

Es imprescindible un breve análisis de lo que esto significa. En América Latina, Uruguay podía ostentar con orgullo el ser la tierra elegida por todos los perseguidos políticos de otras latitudes; hoy son sus hijos los que tienen que salir a buscar amparo y seguridad en el exterior. Durante decenas de años su prensa no tuvo limitaciones para pronunciarse. Una amplia libertad hablaba de un respeto total al hombre y su pensamiento. Hoy no pueden levantarse voces contrarias al gobierno militar; no existe la crítica; la prensa opositora ha sido obligada a cerrar; fueron apresados sus directores y redactores principales. En Uruguay no hay más verdad que la que impone la autoridad, incluso para las agencias internacionales de noticias, que están sometidas a censura posterior. Demás está decir que la prensa extranjera corre la misma suerte de la nacional: no puede circular si divulga información contraria a la dictadura.

La Central Obrera -CNT- agrupa a más de 400 mil trabajadores que luchaban por sus salarios, por un mejor standard de vida y el derecho —obligación de todos— a participar en la vida del país. Una tradición sindical de mucho tiempo hablaba de una conciencia y una militancia combativas. En duros enfrentamientos con el Estado y las patronales privadas, los trabajadores uruguayos habían, paso a paso, logrado un status de respeto y consideración. Hoy se ha ilegalizado a esa Central y a los sindicatos que la integran; detenido a sus principales dirigentes, impedidos los obreros de toda actividad gremial. Se ha retornado a 1905, cuando la defensa del salario y la agremiación se pagaban con cárcel, cuando no con la vida.

Los partidos políticos, sustento de toda organización democrática que se precie a sí misma; desarrollaban una labor que, con altibajos y claroscuros, significaba la posibilidad del hombre de construir su Uruguay, bregando por las soluciones más afines a su inquietud. Los llamados Partidos Tradicionales, aun representando intereses de clase y desgastados por el ejercicio del poder o por una oposición muchas veces complaciente, eran sin embargo armas al alcance ciudadano. El surgimiento de un Frente Popular, que aglutinaba a colectividades políticas de izquierda, con claro sentido nacional, prometía la alternativa de una trincherera para luchar realmente por el país. Hoy todos los partidos políticos están proscritos, clausuradas sus sedes, inhabilitados sus dirigentes para actuar, marginados de todo el proceso cívico de la nación.

LA UNIVERSIDAD

La Universidad uruguaya, cuna rebelde de donde surgieron muchos de los más denodados luchadores por la Liberación, formadora de profesionales prestigiosos que repartieron la cultura recibida por muchos países de América y que sobre todo educó hombres en el sentido más integral del vocablo, está reducida hoy, como toda la enseñanza, a ser tan sólo un local donde se imparte conocimiento, se somete al joven a las presiones de un gobierno hostil y se exige una enseñanza ajena al proceso nacional, vedándose toda intervención en los problemas de su Patria. Profesores destituidos, estudiantes sancionados, maestros imposibilitados de educar, cátedras y asignaturas digidadas por la autoridad militar, sólo pueden dar, en el correr del tiempo, una Juventud de rodillas y un pueblo manso. Eso es lo que se persigue, eso es lo que se quiere. Y por eso el Ejército capacitado exclusivamente

para destruir — o para construir — silenciosa el Parlamento, la prensa y los Partidos Políticos. No quiere voces opositoras ni que se divulgue la verdad. Conciente de su debilidad confiesa que el conocimiento popular de los hechos reales, tal como son y no como los presenta, termina con el régimen. Y para completar su obra cierra los Sindicatos y la Universidad, porque sabe que son el fermento natural de toda lucha contra la injusticia, la arbitrariedad, el crimen y la inmoralidad.

Pero eso no basta. Ni aun así se doblega a un pueblo que lucha por su independencia. En la historia de la humanidad, la libertad ha sido siempre arrancada al tirano contra su voluntad. Sólo los que luchan alcanzan su feliz destino. Para impedir toda resistencia y eliminar toda posibilidad de reacción, la dictadura militar se ha visto obligada a torturar, perseguir, acosar, maltratar a todos aquellos que lo enfrentan, o a los que no son sus adeptos o a los que simplemente no aceptan su accionar. Aun sin actitud de enfrentamiento, aquel que no comulga con el régimen sufrirá sus represalias. Así que hoy en día la represión ha alcanzado límites que superan toda imaginación. Los uruguayos torturados superan el número de 5 mil y por las cárceles y cuarteles militares, han desfilado más de 40 mil personas. El número debe relacionarse con el total de habitantes del país y entonces las conclusiones son escalofriantes. Uruguay tiene apenas 2 millones 500 mil habitantes. Esos números trasladados a Italia por ejemplo, darían para una población estimada en 50 millones, una cifra de personas detenidas cercana a los 800 mil y de torturados de 100 mil. Hoy hay en los establecimientos de detención uruguayos, más presos políticos que presos por delitos comunes.

Todo esto ha sido posible mediante dos elementos que es necesario juzgar con atención. Primero, la más cruel de las torturas, y segundo una entrega total del ciudadano a la Justicia Militar, ejercida por oficiales, que carecen de independencia, competencia y vocación para poder ejercer tan delicada función. Sin embargo, la libertad, el honor, el buen nombre, la dignidad, los bienes y la vida de la gente está sometida a jueces militares, educados para una actividad totalmente distinta, formados en una obediencia total a la autoridad y a los mandos superiores, cumplidor constante de las órdenes impartidas, que no pueden ni discutir ni analizar. La justicia militar uruguaya seguramente única en América, coloca al civil, al ciudadano en un sometimiento total al poder militar. Este detiene, interroga, ejecuta la instrucción sumaria, acusa, juzga, condena y aún más, vigila y controla al prisionero. Como que es parte en todo el proceso represivo, demás está decir que los juicios instruidos están plagados de errores, carencias, arbitrariedades, monstruosidades jurídicas; en última instancia no son más que la expresión de una voluntad decidida a castigar y no a impartir justicia.

LA TORTURA

Pero el capítulo más repulsivo de todo el proceso está constituido por la institucionalización de la tortura. Digamos que abarca todos los aspectos imaginables, tanto físicos como espirituales, individuales como colectivos, públicos como privados. Y va desde el plantón hasta la picana eléctrica, en un largo rosario de prácticas crueles que detallamos extensamente en el Memorándum antes mencionado. La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan M. Bordaberry —el dictador actual— y los militares, un arma de lucha destinada a obtener información. Maltratando al individuo se logra que confiese lo propio y lo ajeno, que cuente planes, que revele secretos, que indique a los compañeros de su grupo. Todo el aparato militar está destinado, por consiguiente a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sufrimiento creciente, de tal modo que reducido a la impotencia, quebrado física y mentalmente, termine por decir lo que no quería decir. Aunque como bien sostenía el insigne maestro Carnelutti, siempre está latente la probabilidad de que el testigo intimidado, atemorizado, maltratado, declare cosas que no son ciertas, tan sólo para evitar que continúe el castigo, o que acepte lo que el torturador quiere imponerle. Aunque no es el tema, bien vale la digresión, porque con eficacia argumentaba el tratadista italiano, el juez no puede saber si

lo que se dice o adm... por el detenido es realmente la verdad que se recibe o la mentira que se consiente. En ambos casos la motivación es única, la misma. Lo que se quiere es terminar con el dolor, con la angustia física o espiritual. Verdad o mentira, son sólo un medio para que el castigo finalice. No obstante la tortura no termina con la confesión del detenido. Deshechas sus fuerzas, obligado a admitir determinados sucesos, humillado frente a sí mismo, la tortura continúa y se repite, insistentemente, en el tiempo. La deprimente historia de estos años uruguayos está llena de casos en que se ha torturado con reiteración, cada tanto tiempo, a detenidos que ya habían sido procesados, como una manera de demostrar que la autoridad militar estaba siempre presente y que la pena no se agotaba en la condena y la prisión. La tortura era también una forma de sanción. Son otras las razones que tiene ahora la dictadura para seguir torturando. Y muy difíciles de comprender.

Se tortura como venganza, cada vez que la Resistencia realiza un acto contrario al Régimen. O como castigo colectivo, al cumplirse fecha de un acto anterior. O como sanción personal, o por faltas reales o ficticias. Es necesario terminar con la leyenda de los movimientos guerrilleros y se tortura entonces para destruir su alta moral, como también se tortura humillando al adversario, para levantar la moral de una tropa claudicante. Aparece la tortura para hacer traidores, para atemorizar al resto de los integrantes de un movimiento; para prevenir a la población; se tortura a uno o a varios, para intimidar a todos.

Pero sobre todo se hace sentir la impunidad de quien tortura. El ejército es quien manda, nadie resiste ni controla su conducta. Como prueba de ello, tortura porque sí, a cualquiera, cuando se le antoja. No hay más poder que el suyo.

EL VICIO DE TORTURAR

Es cierto que si hay una patología de la tortura, y que ésta puede transformarse en una enfermedad, de tal modo que quien la practica —el militar en este caso— adquiere el hábito del vicio. Su insatisfacción, sus nervios, sus crisis, su intranquilidad, sólo se calma en la práctica constante de la tortura. La represión es un medio de proveer de material de laboratorio para esas experiencias personales. Hay toda una literatura que explica acabadamente cómo, en muchos torturadores, el placer sádico de castigar a un ser humano, sustituye con creces el ejercicio del acto sexual. Si, pero sería un error imperdonable creer que el ejército uruguayo practica la tortura como una desviación moral, aunque lo sea, o como consecuencia de una enfermedad contraída en la actividad profesional, aunque haya casos de esta naturaleza. El ejercicio de la tortura es una actividad planificada, una conducta consciente, originada en los altos mandos, consentida cuando no inspirada por el propio señor Bordaberry. Es parte medular de un plan político de entrega de la nación; y siguiendo instrucciones que hoy se puede afirmar provienen del exterior y reconocen un común denominador. La pregonada integración latinoamericana, económica, política, social, sólo se ha consumado en los hechos en la integración de su policía, sus ejércitos y la actividad represiva. En Brasil, en Chile, en Bolivia, en las repúblicas bananeras, en el Uruguay, oficiales de distintos ejércitos pero discípulos todos de los EU, ejercitan con probada eficiencia, el sometimiento del ser humano, apelando a los más indignos recursos. La comisión del Senado norteamericano que investigó la intromisión de su país en América Latina —la ayuda de la Alianza para el Progreso a las policías y ejércitos del continente— comprobó el respaldo, la influencia y las enseñanzas norteamericanas. El senador demócrata Frank Church así lo comprobó en su intervención de 1972 y hace muy pocos meses, el senador Demócrata de Dakota del Sur, James Abourezk denunció la ayuda militar norteamericana sosteniendo que "las dictaduras latinoamericanas usan nuestro dinero para reprimir y suprimir a sus propios pueblos".

La necesidad impostergable para la oligarquía vernácula, dependiente del imperio del norte, de reducir toda combatividad de sus pueblos y todo intento de real liberación, ha insistido la tortura como no se había conocido antes en esos países, retrayendo la lucha a siglos y civilizaciones perdidas. El hombre ameri-

cano conoce cada día mejor es su verdadera idealidad. Quiere, realmente, para su pueblo y su país un destino distinto al actual y por distinto, mejor. Los militares, ensombrecidos del poder, recurren a cualquier método para impedir la militancia, la resistencia, la voluntad popular de independencia total.

En el espinoso trámite de consolidarse en el gobierno, la tortura es imprescindible. Todos los civiles son alcanzados; cae sobre políticos, incluso partidarios del gobierno y sobre comerciantes, hombres de finanzas, industriales a los que supuestamente se cree incurso en faltas o delitos. Un régimen de esta naturaleza, ya no podrá desprenderse de la tortura, ella es parte de su esencia, y su vigencia. Deline al gobierno tanto como cualquier idea o programa. El régimen uruguayo para mantenerse en el poder necesita de la tortura; de elemento destinado a obtener información primero y más tarde represivo, ha devenido en un arma básica sustancial, de su presencia al frente del país. Sólo así se justifica que se detenga y se encierre a menores de edad, y que se persiga a jóvenes de 15, 16 y 17 años y se les confine en albergues de recuperación junto a delincuentes.

EL REGIMEN SE HA DESNUDADO

El régimen ha desnudado sus intimidades; el pueblo ahora sabe cabalmente, al conocer todo este proceso que, en su definición, le va la vida. La tortura ha dejado de ser un medio conducente; ahora es un respaldo fundamental del sistema. El régimen vive si tortura, porque si deja de torturar el pueblo se alza. Como que aun torturando, el pueblo se levanta igual pronto para la pelea.

Acusamos a la dictadura uruguayana, a los civiles con cargos, a las fuerzas armadas sin excepción, de haber arrasado las instituciones, conculcado las libertades, mancillado la tradición oriental, violado la Constitución, las leyes, los acuerdos internacionales; los acusamos de haber perseguido, acosado, torturado, vejado y asesinado a su pueblo, transformando las cárceles en lugares de sufrimiento y escarnio. Los acusamos de haber tratado por todos los medios de reducir al hom-

bre común y anónimo, que tan sólo vive, así como al que lucha por la liberación nacional, a meras cosas, incapaces de sentir y pensar. Los acusamos de haber querido destruir su nacionalidad y su fibra patriótica y de haber condenado a sus hermanos de tierra al sufrimiento y al dolor.

Aportaremos la prueba necesaria, los testimonios correspondientes, los documentos que certifiquen nuestros dichos.

Nada pedimos materialmente a otros pueblos ni a otros hombres. Nuestro padre Artigas, héroe de nuestra Independencia, nos enseñó que "nada debmos esperar sino de nosotros mismos". En eso estamos, encarrando y resolviendo nuestras dificultades, pero mientras, sentimos el deber insoslayable de que todos los seres del mundo conozcan la infamia que asuela nuestra Patria. Sólo queremos que nuestra verdad se sepa; que en todos los rincones del mundo se divulgue la maldad y traición de estos hombres, así como la sangre y las viriles lágrimas de quienes han sufrido y han dado su vida por la causa de la Liberación Nacional. Los hechos no suceden en vano. Siempre hay una sanción moral, un juicio de la historia; a ello nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a hacer nosotros mismos la historia de estos años.

En este Tribunal Russell 20., representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la Tierra, asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que habiendo sufrido no pueden gritar su rebeldía y proclamar su lucha. Pero no sólo es una voz de acusación y de condena. Es también y siempre una voz de esperanza y de fe.

De esperanza y de fe en nuestra Patria, en nuestro Pueblo, en su Lucha, en el Hombre Nuevo que está naciendo para la Liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros ahora: "Hórramos a los que se han ido para siempre; cantamos a los que estando en la Tierra, ya están teniéndolo con el trigo".

ROMA, 30 de marzo de 1974.

"Siempre hay una sanción moral, un juicio de la historia; a ello nos remitimos, pero no pasivamente. Aspiramos a hacer nosotros mismos la historia de estos años."